

Experticia en género y la construcción institucional.

Stephania Yate Cortes

Universidad de los Andes, Colombia

Abstract.....	1
Introducción.....	2
Estado regulador.	3
El Derecho Internacional y el reconocimiento global de los derechos de la mujer.....	5
i. Derechos Humanos de la Mujer.	5
ii. Comunidad epistémica.	9
Aproximaciones nacionales: un nuevo panorama institucional.	13
i. Perú.....	13
i. Costa Rica.....	18
Conclusiones.....	21
Bibliografía.....	25

Abstract

This research studies how feminists have achieved a global impact, strengthening the gender perspective as an expertise, and how it creates a new institutional scene inside the states. Furthermore, the paper aims to assess whether it is possible to transplant the use of "regulatory agencies" in the field of human rights, and if this transplant could operate under the same logic of practicality and efficiency. This paper is divided in four sections: the first section provides a brief explanation regarding the regulatory state, in order to identify the key points that will be used to address the research questions; The second section presents a historical overview of the most important instruments for women's rights in international law and a brief explanation about the relation between feminism and international law; The third section presents the institutions that have created Peru and Costa Rica to ensure women rights. Finally, the fourth section concludes.

Introducción

Detrás de la idea de objetividad y experticia en un campo concreto del conocimiento, se han escondido nuevas formas de gobernanza que han impactado a nivel global. Es así como este anhelo por garantizar un conocimiento técnico y “neutral” se ha trasladado a la estructura institucional de los Estados, creando nuevas formas de organización y regulación.

La creación de agencias regulatorias, o instituciones especializadas en la regulación de prestación de servicios como el suministro de agua potable, la televisión o la salud, comenzó a implementarse en países del “norte” global, hasta llegar a los países del sur. Sin embargo, cada vez más estudios muestran como la neutralidad de las agencias es muy cuestionable, sobre todo cuando estas se han trasplantado en países del sur global.

Si bien esta falta de neutralidad puede ser percibida como negativa, ya que no cumple con el objetivo inicial con el cual se crearon este tipo de instituciones, abre nuevas ventadas de oportunidades para diferentes grupos u actores con agendas concretas. Dependiendo de cual es la experticia, y quienes son percibidos como expertos, estas personas podrán definir cómo se regula la prestación de un servicio, reduciendo las objeciones a sus decisiones.

La mayoría de estudios en este campo, se han centrado en evidenciar como se generan desacuerdos entre los usuarios y prestadores del servicio, hacia cual de las dos posturas se inclina la institución especializada, y si existen nuevos actores que entran a decidir estas disputas. Sin embargo, este artículo pretende evaluar si es posible trasplantar el uso de “agencias regulatorias” en el campo de los derechos humanos, y si este trasplante podría funcionar bajo la misma lógica de practicidad y eficiencia. La respuesta a estas preguntas parece depender de que el conocimiento acerca de un derecho concreto se consolide y reconozca como una experticia, y que por su complejidad sea necesario delegar su regulación a una entidad “autónoma”.

Con estas inquietudes en mente, se presentará un estudio sobre cómo las feministas han logrado un impacto a nivel global, consolidando la perspectiva de género como una experticia, y repercutiendo en la creación de diferentes modelos de regulación a nivel estatal. Concretamente, se estudiarán los modelos que se han desarrollado en Costa Rica y

en Perú, cada país con una aproximación diferente a cómo se deben regular los derechos humanos de las mujeres.

El documento esta constituido por cuatro apartados; el primero presenta una breve explicación sobre Estado regulador, con el fin de identificar los puntos centrales que se utilizarán para abordar las preguntas de investigación expuestas. El segundo apartado presenta una reseña histórica de los instrumentos de derecho internacional más relevantes para la protección de los derechos de las mujeres, así como la creación de organismos especializados en promover estos derechos. En el tercer apartado se estudiarán las instituciones a nivel nacional que han creado Perú y Costa Rica. Finalmente, se presentan las conclusiones.

Estado regulador.

Es común observar que en países con economías en desarrollo, se adopten modelos, instituciones o políticas que son promovidas por distintos organismos, o incluso incentivadas por los poderes internos del país. Con el Conceso de Washington la prestación de muchos servicios que habían sido públicos comenzó a privatizarse, fenómeno que tuvo un gran impacto en América Latina, generando una nueva legislación y organización institucional alrededor del nuevo modelo.

Ya que la privatización de servicios exigía una nueva regulación, nace el concepto del Estado Regulador. Es difícil referirse a este término, ya que debido a sus múltiples implicaciones, este puede aludir a: *“la regulación de las industrias recientemente privatizadas; el mundo transformado de la autorregulación; la cara "social" de la regulación; y el mundo de la regulación dentro del sector público”* (Moran, 2001).

Teniendo en cuenta que con este nuevo modelo la prestación de servicios involucra intereses de privados, se debía estructurar un modelo en el cual el Estado proporcione cierta estabilidad y beneficios que hagan atractivo invertir. Sin embargo, que la regulación del servicios este en manos de la rama ejecutiva y legislativa, era percibido como un método ineficiente y poco neutral. Por lo anterior, nacen las agencias regulatorias, instituciones de carácter técnico que regulan la prestación de servicios.

“El concepto de estado regulador en sentido amplio connota una mayor confianza en instituciones que operan alejadas del brazo del gobierno, aisladas de las

presiones políticas diarias y basando sus decisiones en experticia técnica” (YEUNG, 2010).

Estas instituciones, denominadas agencias regulatorias, fueron la respuesta para intentar alejar el debate político, y acercar el conocimiento técnico de cada área. La independencia de estas agencias fomenta “compromisos creíbles” a nombre del Estado de limitar el oportunismo regulatorio (Gilardi, 2002). Sin embargo, si bien se promueve la especialización de la regulación, se ha visto que las agencias regulatorias, en realidad han sido creadas con la intención principal de alejar estos temas de la contienda política, garantizar predictibilidad y estabilidad, y así proteger los intereses de los inversionistas que controlan la prestación de ciertos servicios (Morgan & Dubash, 2013).

Ya que la agencia debe ser “neutral”, se ha establecido que debe mantenerse alejada de presiones y de todo tipo de influencias. Es decir, debe garantizar que no se entre en el debate político, o que no se beneficien injustificadamente los intereses privados, ya sean de los consumidores o las compañías que van a ser reguladas (Smith, 1997). Además, la entidad en su aspecto organizacional, debe promover que sus empleados estén capacitados y que no estén vinculados con ninguno de los actores involucrados.

El uso de las agencias regulatorias ha sido promovido por distintas instituciones, principalmente por entidades financieras. Por medio de las condiciones establecidas para acceder a préstamos, entidades financieras como el Banco Mundial, llevan a los Estados a incorporar estas figuras como requisito para adquirir apoyo económico (Morgan & Dubash, 2013).

Cuando la concepción inicial de la agencia regulatoria se inserta en un nuevo contexto social, como el de Estados con economías en desarrollo, muestra variaciones y crea nuevas dinámicas entre los diferentes actores sociales. Es así como las agencias regulatorias en países del sur, no parecen mostrar el nivel de “independencia” que se pretendía, pues factores como la desigualdad en el acceso a servicios básicos, o la falta de capacidad económica y técnica del Estado, cambian algunas de las premisas básicas de esta figura.

Sin desconocer que el concepto de Estado Regulator está íntimamente ligado a la regulación de servicios que han sido privatizados, y que uno de sus objetivos principales es la protección de las inversiones, en este documento se exaltarán solo algunos de las características del concepto. De acuerdo a los objetivos de este documento, el término de Estado regulador hace referencia a la existencia de una “agencia regulatoria”, entendida

como una institución compuesta por expertos dedicados a la regulación de un tema en concreto, la cual permite garantizar neutralidad.

Por esta razón se invita al lector a pensar cómo la consolidación de un conocimiento como experticia, puede ser un factor central en la agenda política de grupos concretos, en este caso las defensoras de los derechos de las mujeres. Posicionar un conocimiento como una experticia, y que esto promueva la creación de una institución especializada en el tema, facilita la implementación de programas, políticas, etc. Si bien la agencia no garantiza obtener todos los resultados deseados, si abre un nuevo espacio para mantener vigente los derechos de la mujer como una prioridad.

El Derecho Internacional y el reconocimiento global de los derechos de la mujer.

Lograr reconocimiento de una causa tan importante como la reivindicación de la mujer en la sociedad ha requerido de una agenda política a nivel nacional e internacional, y de estrategias contundentes para lograr permear las estructuras de poder existentes. Con el paso del tiempo el feminismo se ha ido transformando, se ha diversificado en distintas corrientes, y ha adoptado nuevas estrategias tanto como disciplina académica, como en su trabajo de activismo. El objetivo central de este texto no es asumir la tarea ambiciosa de detallar cada una de las corrientes feministas, su desarrollo y debates, ya que el objetivo final es ver un poco cómo la utilización estratégica del derecho internacional facilita permear la estructura institucional a nivel nacional.

i. Derechos Humanos de la Mujer.

Uno de los primeros acercamientos del feminismo al derecho internacional está enmarcado dentro del de lo que algunas académicas denominan el feminismo liberal de la inclusión (ENGLE, 2005), caracterizado porque uno de sus objetivos centrales era la inclusión de la mujer como sujeto de derecho internacional. El rasgo principal del feminismo liberal de la época es que el objetivo central se materializaría a través de la creación de órganos internacionales especializados en la mujer, y con la ratificación de tratados que comprometían a los Estados al reconocimiento de los derechos de la mujer.

Este desarrollo inició en 1928, cuando se estableció en la Organización de los Estados Americanos la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM). La CIM comenzó a trabajar para conseguir que la comunidad internacional se movilizara y creara instrumentos que regularan específicamente los derechos de la mujer. En ese momento los espacios para

discutir los problemas y necesidades de la mujer eran considerados casi inexistentes, por lo cual no se les daba la suficiente visibilidad e importancia.

La CIM se enfocó en la creación de documentos legales, para lo cual se inició estratégicamente el lobby frente a los diplomáticos de la época, quienes poco a poco fueron introduciendo los temas neurálgicos que la CIM deseaba discutir. El primero de ellos fue la nacionalidad, ya que se solía asociar la nacionalidad de una mujer con la de su esposo, dejándola desprotegida en caso de viudez o divorcio. Este primer punto en la agenda de la CIM fue abordado con la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer, la cual fue firmada por veinte Estados, entre ellos Perú y Costa Rica. Sin embargo, muchos de estos Estados tardaron mucho en ratificar el tratado, como es el caso de Costa Rica que ratificó en 1953, o algunos nunca lo hicieron, como Perú.

El segundo impacto que tuvo la CIM fue incentivar que la Organización de Naciones Unidas creara la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CJSM) en 1946. Se afirma que la CIM fue la madre de esta Comisión (Meyer & Prugl, 1999), ya que muchas de las fundadoras de la CIM, fueron también fundadoras de la CJSM. Tras estos logros, y una vez realizado un fuerte trabajo para promover los derechos civiles y políticos de la mujer, promoviendo fuertemente el derecho al voto; se comenzó a abordar el tema de la violencia contra la mujer.

Tras alcanzar muchas de las metas iniciales, se dio paso a otra preocupación que hasta hoy se mantiene vigente: la violencia contra la mujer. Es así como uno de los instrumentos más relevantes que se realizó en el marco de Naciones Unidas, es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), en 1979. Este es uno de los instrumentos más importantes hasta la fecha, y permitió dar aún más fuerza a la reivindicación de los derechos de la mujer, el cual había comenzado desde los 60's.

En virtud del artículo 20 de la Convención, también nace una nueva institución a nivel internacional, un comité que se dedica concretamente a vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados. Sin embargo, el trabajo de la Comisión esta ligado a la revisión de los informes que remiten los Estados, no tienen una potestad de investigar violaciones del tratado, y su labor principal ha sido emitir recomendaciones a los Estados que ratificaron la Convención.

Por su parte en 1988, la CIM también comenzó a trabajar en una nueva convención, presionando a los gobiernos a prestar atención y dar prioridad a la violencia contra la mujer.

En 1994 se adopta el texto de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, conocida como la Convención de Belem Do Para.

La Convención de Belem do Pará constituyó un gran aporte, ya que establece que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y que limita el reconocimiento de los derechos y libertades de la mujer. Además, define la violencia contra la mujer como *“cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.”* Art 1.

Más allá de esto, establece los deberes de los Estados Americanos, entre ellos se destaca:

“Artículo 7. f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos”(…)

“Artículo 8. d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados”

Estos artículos comienzan a perfilar la importancia de crear entidades especializadas y políticas concretas para la mujer. Además, en virtud del artículo de la Convención, los Estados se comprometían a incluir dentro de sus informes de Estados, todas las acciones y avances visibles que tuvieran en el proceso de garantizar la protección de los derechos de la mujer. A diferencia de la primera Convención promovida por la CIM, la Convención de Belem do Para fue ratificada con mayor rapidez. Por ejemplo, Costa Rica la firmó en septiembre de 1994, y la ratificó en mayo de 1995; y Perú la firmó en diciembre de 1995, y la ratificó en febrero de 1996.

La Convención de Belem do Para tuvo un gran impacto, pues comprometió a los Estados a tomar medidas reales frente a la violencia contra la mujer, en especial logró que se prestara mayor atención a la violencia en la esfera privada, lo que motivó a que actualmente haya cada vez más legislación y criminalización de la violencia doméstica. Se puede afirmar que “La Convención abr(ió) nuevos espacios dentro de las instituciones

interamericanas para la CIM y para los privados y ONGs para trabajar para que los Estados se mantengan responsables de erradicar la violencia contra la mujer¹.

Finalmente, se resalta la creación de ONU Mujeres en 2010, una entidad creada por la Asamblea General de Naciones Unidas, para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Esta entidad se crea con tres objetivos generales, 1) apoyar a organismos como la CCJM en la formulación de políticas, 2) asesorar a los Estados partes, y 3) dar cuenta de los esfuerzos de la Organización de Naciones Unidas en materia de igualdad de género.

Sin embargo, la creación de estas instituciones e instrumentos no es el único cambio que se ha llevado a cabo, la presencia de mujeres en muchos de los órganos de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, es más fuerte y visible. Ona Florez, quien se desempeñó como investigadora y coordinadora académica del Programa de Mujeres, Género y Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile explica que han existido grandes esfuerzos por visibilizar y generar conciencia respecto a los derechos de las mujeres²; sin mencionar que la presencia de mujeres formadas, y que promueven políticas desde una perspectiva de género es mayor. Ella misma es un gran ejemplo, ya que actualmente es una de las especialistas en derechos humanos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La presencia de mujeres en distintos ámbitos, ya no solo limitados a la Comisión Interamericana de la Mujer, o la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer permite que cada vez se aborden más temas desde la perspectiva de la mujer. Un logro muy importante que no excluye que distintas organizaciones no gubernamentales y académicas continúen propendiendo porque este proceso no se detenga, hasta que se logre obtener una estructura que permita la realización de los derechos y libertades de la mujer a nivel nacional e internacional.

Durante el proceso que ha significado visibilizar la desigualdad, la promoción de modelos sociales que oprimen a la mujer y de entrar a hacer parte del panorama internacional, se ha establecido un desarrollo académico, pero más relevante aún, se ha consolidado una agenda

¹ (Meyer & Prugl, 1999). The Convention opens new spaces within inter-american institutions for both the CIM and private individuals and NGO's to work towards holding states accountable for eradicating violence against women.

² Ver: Equipo de trabajo, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/mandato/equipo.asp>.

política que se ha ido modificando con el tiempo ha medida que se van consiguiendo grandes o pequeños triunfos, pero que no se detiene. Se ha consolidado un grupo que con el tiempo se ha fortalecido y que ha aprendido de su trayectoria, logrando metas que hace medio siglo habrían sido impensables.

ii. Comunidad epistémica.

Es difícil referirse al feminismo en términos generales, ya que además de agrupar a distintos grupos de activistas, también involucra una producción teórica que se ha desarrollado entorno a develar la discriminación que históricamente ha sufrido la mujer. Muchas de las definiciones del feminismo parecen quedarse cortas en explicar realmente lo que implica, pero algunos esfuerzos parecen enmarcar mejor su significado:

“Es una ideología plural y diversa con un solo objetivo político: transformar la situación de subordinación de las mujeres en todo el mundo. La teoría feminista es a su vez, la producción teórica que se enmarca dentro del contexto feminista” (Facio)

El desarrollo del feminismo como una ideología, que pretende construir desde distintos ángulos una sociedad más igualitaria, ha logrado permear poco a poco las estructuras de poder tanto a nivel internacional y como nacional. Esta evolución puede entenderse dentro del marco de una comunidad de práctica, la cual se define como un grupo de personas unidas por relaciones informales que comparten una práctica en común (Snyder, 1997).

La conformación de una comunidad de práctica puede tener diversas implicaciones, ya que el dominio de un conocimiento dota a los que lo dominan del sentido de pertenecer a una iniciativa, esto une a la comunidad a través del desarrollo colectivo de una práctica común, la cual es constantemente renegociada entre ellos³ (Adler, 2008). Lo que es aún más importante, es que la adopción de esta nueva práctica no solo puede generar auto-transformación, también puede llegar a cambiar la estructura social⁴.

³ “The knowledge domain endows practitioners with a sense of joint enterprise, which ‘brings the community together through the collective development of a shared practice’ and is constantly being renegotiated by its members.”

⁴ The adoption of a new practice can be not only self-transforming but also constitutive of the ability to change social structure

Si bien a simple vista la conformación de una comunidad de práctica no parece tener implicaciones políticas, no quiere decir que no pueda tenerlas. En este caso, las feministas conforman un grupo donde se comparte un interés por transformar la forma en la cual se ha definido a la mujer, en consolidar la igualdad de género, y que entorno a este objetivo común se organizan para lograr efectos visibles en su realidad.

Es claro que se trata de una comunidad que se ha transformado con el tiempo, su estructura es cada vez más compleja porque se han creado distintas posturas respecto a la mejor forma de alcanzar sus objetivos; es decir, para un mismo propósito se han pensado distintos caminos y soluciones.⁵ Probablemente, en la actualidad muchas feministas no estarían de acuerdo con las feministas liberales, pues consideran que el camino para lograr la igualdad de género no es crear órganos especializados en la mujer. Incluso hay facciones del feminismo que rechazan la idea de que un grupo de mujeres alejadas de la realidad de aquellas más marginadas, o que pertenecen a una cultura completamente diferente, puedan comprender sus necesidades.

Sin embargo, estas diferencias no parecen debilitar el feminismo como un todo, como un espacio de reflexión sobre la mujer, sus derechos y en general como es definida por la sociedad, a pesar de las diferentes culturas. Se trata de un debate interno que genera que nunca se llegue a una meta, sino que esta vaya mutando y siendo cada vez más ambiciosa. Cada parte del discurso de las feministas deja claro que va más allá de una disciplina, se trata de una comunidad de práctica con una agenda política.

Teniendo en cuenta que el feminismo posee dentro de su definición un componente teórico muy importante, que a su vez define su agenda política, las feministas se consolidan como expertas en el campo. Este es un factor muy importante, ya que lleva al feminismo a ser definido como una comunidad epistémica, entendida como “*network of knowledge-based experts or groups with an authoritative claim to policy-relevant knowledge within the domain of their expertise*”⁶ (Haas). El rol de la comunidad epistémica es definir los problemas para los encargados de realizar política pública, de esta forma revelan relaciones

⁵ Ver: Peligroso Pop. Lina Céspedes Baez. En línea: <http://sentiido.com/peligroso-pop/>

⁶ Characteristics: (1) “‘a shared set of normative and principled beliefs’, which provide a value-based rationale for the social action; (2) ‘shared causal beliefs’, which then serve as the basis for elucidating the multiple linkages between possible policy actions and desired outcomes; (3) ‘shared notions of validity’ for weighing and validating knowledge in the domain of their expertise; and (4) ‘a common policy enterprise’ to which their professional competence is directed, presumably out of the conviction that human welfare will be enhanced as a consequence.

de causa-efecto que están escondidas en problemas complejos, y ayudan a los políticos a definir sus propios intereses (Haas).

El doble carácter del feminismo, como teoría y como movimiento, refuerza su capacidad de expandirse. Una vez las teorías feministas son reconocidas, permite que todas quienes dominan estos conocimientos se consideren como voceras legitimadas para sugerir o implantar políticas que propendan por la igualdad de género.

iii. El derecho y el feminismo

Si bien se ha hablado en repetidas ocasiones sobre el doble carácter del feminismo, es importante resaltar de forma breve que uno de los legados más importantes de la teoría feminista es develar cómo los roles del hombre y la mujer, que eran percibidos como inherentes a cada uno, son en realidad una construcción social. Es decir, que las características que se atribuían como propias de la mujer (sensible, hogareña, etc.), en realidad no son más que parte de una ideología reforzada por la religión, el derecho, entre otros, y que han situado a las mujeres en condiciones de inferioridad frente al hombre en distintos ámbitos de la vida. (Facio)

Esto implica que el objetivo final del feminismo implica transformar la forma en la cual se define a la mujer, un objetivo transversal que implica cambiar toda aquella estructura social que perpetúe la desigualdad entre hombres y mujeres. El término de género, es utilizado para denominar esa construcción social que asigna a la mujer y al hombre una serie de características, las cuales suelen ser entendidas como “inherentes” a estos.

Ahora bien, el derecho es entonces un punto central en la discusión, ya que tal como lo ha resaltado el profesor René Urueña, el derecho tiene la habilidad de crear y definir sujetos; habilidad que han identificado las feministas, y que han tenido en cuenta al momento de plantear sus estrategias. Es así como las feministas se aproximan al derecho ya sea reconociéndolo como un mecanismo ayuda a definir y mantener una visión concreta de los sujetos, siendo en este caso adversa a la mujer, pero al mismo tiempo que puede ayudar a modificarla. (Urueña, 2012)

Con esto en mente, es fácil de entender que los métodos que el feminismo ha utilizado para aproximarse al derecho internacional no han sido neutrales:

“La metodologías feministas retan muchas tradiciones académicas aceptadas. Por ejemplo, puede reflejar una agenda política en lugar de esforzarse por alcanzar una verdad objetiva en bases neutrales y pueden parecer subjetivas en

lugar de independientes” (Charlesworth, *Feminist Methods in International Law*, 1999)

Los métodos de estudio del derecho internacional no pueden ser neutrales, ya que el feminismo pretende un cambio dentro de la estructura del sistema. Esto se puede ver reflejado en la aproximación de algunas feministas, que consideraban que uno de los problemas centrales es que *“las mujeres o no estaban representadas o tenían una representación insuficiente en los procesos de toma de decisiones nacionales y mundiales”*.

Uno de los primeros pasos que podía comenzar a generar cambios era garantizar una presencia fuerte de la mujer en posiciones de liderazgo, ya que así podrían influir al interior del sistema:

“¿Por qué es relevante que las principales instituciones del ordenamiento jurídico internacional están conformadas por hombres? La dominación a largo plazo de todos los órganos significa que los problemas que tradicionalmente conciernen a los hombres son vistos como asuntos que conciernen a la humanidad, mientras que “las problemas que conciernen a la mujer” son relegados a una categoría especial y limitada, por ejemplo, estos asuntos pueden ser consignados a una esfera separada y tienden a ser ignorados.” (Charlesworth, Chinkin, & Wright, *Feminist Approaches to International Law*, 1991).

Es así como cualquier cambio requería acceder al poder, y esto fue central en la constitución de una agenda política. Esta historia esta seguida de varios triunfos, y *“La instalación gradual, pero hoy en día notable, de las feministas y las ideas feministas en el poder jurídico-institucional real”* (Halley, 2006), ha sido denominada *“feminismo de la gobernanza”*.

Se han realizado importantes estudios de caso, para mostrar cómo se ha desarrollado el feminismo de la gobernanza; sobre todo respecto al impacto desde la perspectiva normativa. Uno de los estudios más destacados en feminismo de la gobernanza, publicado por el *Harvard Journal of Law and Gender* (Halley, 2006), ha mostrado la tendencia a la criminalización frente a la violencia sexual en la guerra, y frente al comercio sexual. Dentro de las conclusiones de este estudio se resalta cómo el feminismo de la gobernanza ha tenido consecuencias distributivas, y que se debe tener en cuenta que no siempre se pueden obtener los resultados esperados, o peor aún, se puede generar efectos adversos. Es importante resaltar que si bien el estudio se centra en las consecuencias normativas a nivel internacional, y posteriormente a nivel local, las conclusiones no pierden de vista que *“la azarosa y compleja relación entre la ley en los libros y la ley en acción- y las múltiples*

formas en las cuales el sistema puede ser diseñado para formar pero no para controlar esta relación- parece estar fuera del alcance de las preocupaciones del feminismo.”⁷

El feminismo de la gobernanza, y las preocupaciones que se planteaban en estos artículos publicados en 2006, se enmarcan inquietudes vigentes, que suscitan nuevos estudios que van más allá del espectro normativo, y que pretenden dar un paso a las consecuencias institucionales que se han observado en América Latina.

Esto muestra una dinámica donde los Estados ya no son los principales protagonistas en la regulación, sino que están envueltos en la interacción entre actores, que van moldeando las realidades locales. Más allá de la perspectiva normativa, estas dinámicas van transformando la institucionalidad del país; por lo cual actualmente podemos observar la creación de Ministerios de la Mujer, y de nuevas instituciones dedicadas exclusivamente a su atención.

El feminismo muestra un panorama muy interesante para los derechos humanos, ya que ejemplifica que una comunidad epistémica puede incorporar muchos conceptos, porque no solo incluye las dimensiones consientes y discursivas, y el quehacer del cambio social, sino implica que el poder y la agenda de la comunidad se crucen. (Adler, 2008).

Aproximaciones nacionales: un nuevo panorama institucional.

Perú y Costa Rica fueron seleccionados como ejemplo para el estudio porque ofrecen un panorama muy interesante para observar las consecuencias locales de las políticas para la protección de la mujer. Los esfuerzos adelantados por estos países tienen antecedentes muy importantes a nivel internacional, con la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y concretamente en para el caso de la violencia sexual, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención de Belem Do Para”.

i. Perú

⁷ *Ibíd.* Pág. 420. “The highly contingent and complex relationship between law in the books and law in the action –and the multitudinous ways in which the legal system can be designed to shape but cannot control this relationship- seem to fall outside the scope of feminist concern”.

La estructura institucional peruana presenta un caso interesante de estudio, porque refleja un esfuerzo por cumplir con los tratados sobre la materia, y la creación de espacios que promueven la formación y el ejercicio de mujeres formadas en estudios de género.

Desde 1996 se creó el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, actualmente es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Si bien el Ministerio no se enfoca exclusivamente en la mujer, uno de sus objetivos es que las mujeres ejerzan *“sus derechos en igualdad de condiciones y oportunidades para lograr la igualdad de género y reducir la violencia familiar, sexual y de género”*⁸.

El MIMP esta conformado por medio de despachos viceministeriales, uno ellos el Despacho Viceministerial de la Mujer, que a su vez tiene tres direcciones generales, la Dirección General de Igualdad de Género y no Discriminación, Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género, y la Dirección General Contra la Violencia de Género.

En el año 2000, la Comisión Interamericana realizó un estudio para determinar el nivel de cumplimiento de la Convención de Belem do Para en la región, en esta se habló específicamente de Perú, afirmando que:

“El Estado peruano no ha adoptado ningún mecanismo específico para la implementación de la Convención; sin embargo, las instituciones estatales encargadas de las políticas para la mujer han integrado los alcances y compromisos de la Convención en sus planes de trabajo.” Adicionalmente los sectores de Salud, Educación, Justicia, Ministerio Público, Interior, Organismos No Gubernamentales y la Cooperación Internacional son miembros de la Mesa Nacional Multisectorial para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, cuyo objetivo es trabajar multisectorialmente de manera coordinada y concertada para enfrentar este problema.”

Tras este reporte, el Estado Peruano promulgó el Decreto Supremo N° 008–2001–PROMUDEH , por medio del que se creó el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, cuya finalidad es “diseñar y ejecutar a nivel nacional acciones y políticas de prevención, atención y apoyo a las personas involucradas en hechos de violencia familiar y/o sexual, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de la población, desde

⁸ Ver: Ministerio De La Mujer Y Poblaciones Vulnerables. En: http://www.mimp.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=878&Itemid=453

una perspectiva de género”. Este programa a dependido de múltiples dependencia del Ministerio de la mujer y Poblaciones Vulnerables (MMPV), y a pesar de que en 2007 se intentó extinguir el programa, el rechazo de la población generó que se volviera a instaurar⁹.

Actualmente, la Ministra del MMVP es Maria Del Carmen Omonte Durand. Quien ha tenido una larga trayectoria en el Congreso, y se ha caracterizado por impulsar proyectos legislativos *“en materia de lucha contra la corrupción y lavado de activos; fortalecimiento de la democracia, equidad de género, transparencia y rendición de cuentas; descentralización y fortalecimiento del Estado; democratización y liderazgo de la mujer en los directorios de las empresas del Estado”*¹⁰. Como máxima autoridad en los temas de mujer e igualdad de género, María del Carmen es parte de la CIM, donde se desempeña como parte del Comité Directivo para el periodo 2013-2015. A su vez, la Viceministra de la mujer Ana María Mendieta Trefogli ¹¹ es abogada con maestría en derecho constitucional, tiene estudios pos título en derechos humanos de las mujeres, estudios especializados en la temática de género, violencia familiar y sexual.

En materia de violencia contra la mujer, dentro de la estructura del Ministerio se creó la Dirección General Contra la Violencia de Género, el cual ha trabajado concretamente en atender las obligaciones del Estado respecto a la protección y atención de la mujer víctima de violencia sexual, así como a la prevención de la violencia. Una de las estrategias para cumplir con la obligación de *“suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia”*, fue la organización de los Centros de atención “Emergencia Mujer” (CEM).

*“Los CEM son servicios públicos especializados y gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia familiar y sexual, en los cuales se brinda orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica. Se procura la recuperación del daño sufrido y se presta asistencia social. Asimismo, se realizan actividades de prevención a través de capacitaciones, campañas comunicacionales, formación de agentes comunitarios y movilización de organizaciones.”*¹²

⁹ DEFENSORIA DEL PUEBLO PERUANO. Centros de emergencia mujer: supervisión a los servicios especializados en la atención de víctimas de violencia familiar y sexual. http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc20082009-183114.pdf

¹⁰ <http://www.oas.org/es/cim/miembros.asp>

¹¹ Ver: http://www.mimp.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=758&Itemid=157

¹² Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. http://www.mimp.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=831&Itemid=429

La Promotora del MMPV peruano, María Toche¹³, afirma que el Centro permite dar apoyo a la mujer, ya que muchas instituciones como la Comisaría, la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, y el poder judicial no atendían correctamente este tipo de casos. El Centro cuenta con psicólogos, abogados y trabajadores sociales, que de acuerdo al caso en concreto guían a la mujer. Sin embargo, los CEM no controlan el proceso de denuncia, ni los exámenes médicos que se deben realizar en casos de violencia sexual, ya que no cuentan con personal médico; es una instancia más antes o durante el proceso penal correspondiente.

La cobertura de los CEM es a nivel nacional, pero en algunos pueblos más pequeños no se han establecido. Sin embargo, para María, los principales problemas que afrontan los CEM es la falta de conciencia por parte de la mujer que acude al centro, ya que muchas veces no desea denunciar, o en el caso de violencia intrafamiliar solo pide que se le “llame la atención” a su pareja. En algunos casos, la víctima se cansa de esperar la culminación de los procesos, y los abandona, ya que si bien la atención del centro es gratuita y se propende por dar apoyo, los procesos en Perú tienen una duración muy larga. Además, agrega que la entidad muchas veces no tiene la publicidad suficiente para que las mujeres conozcan de los CEM y acudan a ellos, pero reconoce que los esfuerzos que se han realizado conllevan a que estos permanecen llenos.

Por último, el Código Procesal Penal promulgado en 2004 ayudó a modernizar el Instituto de Medicina Legal como órgano principal de investigación científica y técnica, que apoya al sistema judicial. Dentro de estos esfuerzos, se desarrollaron Protocolos Especializados para la Evaluación de Presuntos Crímenes Contra la Libertad Sexual, lo cual pretende lograr una homogenización de los criterios con los cuales se realizan los certificados médicos de las presuntas víctimas de estos delitos.

El esfuerzo por luchar contra la violencia sexual es muy importante en el Estado peruano, pero de igual forma se realizan otro tipo de políticas impulsadas por las otras direcciones del Viceministerio de la Mujer. Actualmente se está implementando el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, el cual pretende la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas. Esta iniciativa es definida como “*el proceso de examinar las implicancias que tiene para hombres y mujeres cualquier acción planificada,*

¹³ Entrevista realizada a María Toche, Promotora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Realizada el 31 de marzo de 2014.

incluyendo legislación, políticas o programas en todas las áreas y en todos los niveles” (Plan Nacional de Igualdad de Género).

Este Plan está basado en los resultados de planes anteriores, y tiene incorporados indicadores de cumplimiento, en el cual dependiendo del eje del plan evalúa si se han obtenido mejoras. Por ejemplo, usa de indicadores el número de mujeres que hacen parte de ciertos programas a nivel ejecutivo, o número de niñas que acceden a la educación superior, entre otros. De esta forma, existe mayor facilidad para determinar si el programa es efectivo, o si se debe cambiar la aproximación al problema. De la mano del Plan, el Ministerio organiza eventos, jornadas de capacitación, talleres, dispone de una biblioteca con material sobre investigaciones sobre género y derecho de las mujeres, entre otras iniciativas para trabajar por la igualdad de género.

Las acciones adelantadas por Perú lo sitúan actualmente en la posición número 45 en el ranking del Índice Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial del 2014.

País	Consolidado		Participación económica y oportunidades		Nivel educativo		Salud y supervivencia		Empoderamiento político	
	Rank	Puntaje	Rank	Puntaje	Rank	Puntaje	Rank	Puntaje	Rank	Puntaje
Perú	45	0.7198	98	0,6271	84	0,9875	93	0,9705	27	0,2941

Es importante resaltar que la posición más alta que obtuvo Perú fue en la categoría empoderamiento político, a pesar de que su puntaje no es significativamente alto, la puntuación de los demás países tampoco lo es, el ranking más alto lo obtuvo Islandia, con un puntaje de 0.6554 sobre 1.0000. El puesto más bajo lo ha obtenido en Participación económica, en el cual se encuentra en la posición 98, con un puntaje de 0,6271.

Esto muestra que el país aún tiene que trabajar en fortalecer las oportunidades que tienen las mujeres en el mercado laboral, lo cual incluye eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo, así como el acceso mismo a trabajos cualificados.

Además, al igual que en todos los países evaluados, la participación política de la mujer en cargos altos como la presidencia, los ministerios y las curules del congreso, es baja.

i. Costa Rica

Desde 1974 se creó la Oficina de Programas para la Mujer y la Familia del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, como “la instancia encargada de coordinar las acciones relativas a la celebración de la Primera Conferencia Mundial de la Mujer en México (1975)”¹⁴. Esta fue la primera acción concreta hacia la construcción institucional para atender la situación de desprotección de las mujeres en este país.

Costa Rica abordó los compromisos adquiridos con la ratificación de la Convención de Belem do Para de una forma diferente a la del Estado Peruano. En el caso Costarricense, no se creó un Ministerio de la Mujer, se inició con un Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, “*ente rector de políticas nacionales a favor de las mujeres, con personería jurídica y patrimonio propio, pero todavía adscrito al Ministerio de Cultura.*”¹⁵

En 1998, mediante la Ley de la República N° 7801, el Centro se transformó en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). El INAMU, a diferencia del centro, este se creó como una entidad autónoma y descentralizada. Por otra parte, se creó el rango de Ministra de la Condición de la Mujer quien a su vez asumió la Presidencia Ejecutiva del Instituto¹⁶.

El Instituto tiene una Dirección Estratégica y otra Dirección Administrativa. La Dirección Estratégica del Centro se encarga coordinar las iniciativas, los proyectos legislativos, los centro de atención entre otros. La áreas de esta dirección son:

- Gestión de Políticas Públicas para la Equidad de Género
- Ciudadanía Activa, Liderazgo y Gestión Local
- Construcción de Identidades y Proyectos de Vida
- Condición Jurídica y Protección de los Derechos de las Mujeres, bajo la cual depende el Centro de Información y Orientación a Mujeres (CIO)
- Especializada de Información, con tres unidades a su cargo: Investigación, Documentación y Comunicación
- Desarrollo Regional

(Instituto Nacional de la Mujer Costa Rica, 2014)

¹⁵ Instituto Nacional de las Mujeres. <http://www.inamu.go.cr/web/inamu/9>

¹⁶ *Ibíd.*

- Violencia de Género que tiene bajo su responsabilidad a los tres Centros de Atención y Albergue Temporal a Mujeres Agredidas.

Los centros de atención del INAMU, cuentan con consultorios jurídicos, para tratar asuntos de familia. Si bien durante la visita al INAMU no se logró contactar con los centros o instancias que se encargan específicamente de la violencia sexual, fue posible observar los consultorios jurídicos donde diariamente muchas mujeres se presentan para obtener asesoría jurídica, sobre todo para el pago de la cuota de alimentos a la que tienen derecho sus hijos.

Por otra parte, la Delegación de la Mujer, brinda en materia de violencia sexual orientación en Hostigamiento sexual tanto en el empleo como en la docencia, asesoría y orientación en materia de la Ley de Penalización de la Violencia en Contra de las Mujeres, y atención grupal de mujeres víctimas de violencia por la pareja, violencia sexual y grupo de madres. Aparte de esta asesoría, también cuenta con Centros Especializados de Atención y de Albergue Temporal para Mujeres Afectadas por Violencia, los cuales dan un apoyo y refugio temporal a las mujeres que ven su integridad física amenazada, y no cuentan con un lugar para refugiarse.

Actualmente, Alejandra Mora Mora, es la Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica, y la Ministra de la Condición de la Mujer de acuerdo a la legislación costarricense. Alejandra Mora, tiene estudios de posgrado en derechos humanos de las mujeres y en su trayectoria profesional ha ocupado cargos como la Dirección de la Defensoría de la Mujer en la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica (1993 a abril 2014) y Coordinación Regional de la Red de Mujeres de la Federación Iberoamericana del Ombudsman.

El INAMU, tiene un gran reconocimiento a nivel nacional, y su impacto quiere ampliarse creando un Ministerio de Igualdad y de Género. La iniciativa nació de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, la cual ya tiene listo un Proyecto de Ley¹⁷

¹⁷ Ver: Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Proyecto de Ley Creación del Ministerio de la Igualdad y Equidad de Género, EXPEDIENTE N.º 18.399.

http://www.asamblea.go.cr/Diputadas_Diputados/diputada_mireya_zamora/documentos_relevantes/Proyecto%20de%20Ley%20de%20Creaci%C3%B3n%20del%20Ministerio%20de%20la%20Igualdad%20y%20Equidad%20de%20G%C3%A9nero.pdf

que prevé que este Ministerio promoverá la incorporación de la perspectiva de género en la institucionalidad pública y privada del país, y que el INAMU su plataforma institucional.

Además, Costa Rica adoptó legislación especializada con la Ley contra la violencia doméstica, dentro de la cual se prevé la violencia sexual contra la pareja. Finalmente, al igual que Perú, este país se ha esforzado por estandarizar protocolos de atención a las víctimas de violencia sexual.

País	Consolidado		Participación económica y oportunidades		Nivel educativo		Salud y supervivencia		Empoderamiento político	
	Rank	Puntaje	Rank	Puntaje	Rank	Puntaje	Rank	Puntaje	Rank	Puntaje
Costa Rica	48	0.7165	105	0,6155	1	1,0000	62	0,9747	32	0.2758

El puesto general de Costa Rica es inferior al de Perú, sin embargo tienen importantes fortalezas. Costa Rica tiene el primer puesto en nivel educativo, con el puntaje más alto posible, lo cual implica que el número de mujeres que acceden a educación primaria, secundaria y a una educación “terciaria” es paritaria a la cantidad de hombres que acceden a las mismas. Al igual que Perú, puesto más bajo en las distintas variables del ranking lo tiene en la participación económica, con un puntaje de 0,6155.

Finalmente, es importante resaltar que el INAMU ha creado una plataforma virtual el cual permite la búsqueda de material teórico, este se conoce como el Centro Documentación Luisa González Gutiérrez, se trata de es *“una instancia especializada en género y derechos humanos de las mujeres que tiene como fin contribuir con los cambios sociales y culturales para la transformación de una sociedad en igualdad y equidad para mujeres y hombres, por medio del soporte técnico brindado a partir de insumos teórico metodológicos en materia de igualdad y equidad de género”*¹⁸.

¹⁸ Ver. <http://sistemas.inamu.go.cr/SIDOC/Pages/DetalleResultado.aspx?TipoR=6&IdR=4181>

Conclusiones.

El panorama de la regulación en torno a la protección de los derechos de la mujer, así como la promoción de políticas desde una perspectiva de género, y las instituciones creadas para atenderlas, muestran una clara interacción entre de diferentes actores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La fuerza del feminismo y su influencia en espacios internacionales ha generado lo que se ha denominado por algunos autores como el feminismo de la gobernanza, pero más allá del panorama internacional, las estrategias continúan a nivel nacional, y el conocimiento en la teoría inicial parece ser fundamental.

Una de las formas más claras de cumplir con las obligaciones adquiridas internacionalmente es crear una entidad que se encargue de dirigir las nuevas políticas. Es así como Perú y Costa Rica plantean dos formas diferentes de crear instituciones: el primero lo hace por medio de la creación de un Ministerio que trabaja, no solo por la mujer, sino también de poblaciones vulnerables, unificando en una sola institución todas las estrategias para cumplir con las obligaciones derivadas de la ratificación de tratados y declaraciones de derechos humanos. Por su parte, Costa Rica decidió crear una entidad autónoma y descentralizada, la cual se dedica exclusivamente a tratar los derechos humanos de las mujeres, pero también a realizar estudios sobre género.

Si bien ambos países han realizado esfuerzos, no existe una guía exacta de cómo hacerlo, por lo cual no parece importar si se trata de un Ministerio o de un Instituto, siempre que se muestre que se están realizando esfuerzos, que existen planes concretos, y que se van introduciendo nuevas políticas públicas. Los objetivos centrales de estas entidades están en la lucha en contra de la violencia contra la mujer, planes para promover independencia económica, y en promover una mayor participación política. Además, paralelamente a esto, esta presente un componente teórico que quiere ser reforzado, por lo cual en ambos países se tiene en cuenta la importancia de contar con bibliografía sobre género, de crear espacios de consulta, y capacitar a los funcionarios del Estado respecto a las implicaciones de incorporar un enfoque de género en ciertas áreas.

Sin embargo, parece que el conocimiento de la teoría creada alrededor del concepto del género, puede ser un arma de doble filo, que por un lado fortalece la agenda de las feministas, permitiéndoles crecer académicamente, y tener un impacto en la regulación, pero al mismo tiempo se puede interpretar como una palabra vacía, que legitima políticas dirigidas a la mujer, pero que no modifica las estructuras de las sociedad.

“En el ámbito de las políticas públicas hay una tendencia creciente a crear políticas de género cuando en la práctica se trata de políticas dirigidas a mujeres que dejan intactas las estructuras y relaciones entre los géneros. Una política de género necesariamente tiene que tener como finalidad la superación de la desigual valoración y el desigual poder entre los géneros.” (Facio)

A pesar de que uno de los puntos centrales del feminismo es su contenido teórico, ya que ha logrado posicionarlo dentro de las teorías aceptadas académicamente y ha permitido motivar y moldear una agenda política; uno de los términos centrales de esta teoría puede ser despojado de su contenido y utilizado para adornar cualquier política, siendo entendida como adecuada.

Este inconveniente no implica necesariamente que se trate de una lucha perdida, por el contrario puede reforzar el poder que tienen los activistas a nivel local, el conocimiento permite que una persona pueda ser considerada capacitada para diseñar o dirigir proyectos. Alrededor de este proyecto se promueve al mismo tiempo un nuevo conocimiento, siendo cada vez más común encontrar maestrías, especializaciones o cursos sobre género y política pública.

Si bien es claro que a diferencia de la idea central del Estado Regulador de regular el mercado, el objetivo de estas instituciones es diferente, la experticia en el tema es un punto central, la producción de conocimiento especializado promueve la creación de nuevas entidades regulatorias. Sin embargo es importante analizar hasta que punto la creación de estas entidades puedes abrir o cerrar puertas a cambiar una estructura social.

Al analizar el Estado regulador en el sur global es constante encontrar que la idea de una independencia total de la agencia choca con la realidad que vive la sociedad, ya que desconoce que la prestación de servicios básicos normalmente no llega a cubrir a toda la población, que la situación económica es diferente, y por lo tanto el manejo de tarifas, estrategias, etc. choca con los intereses de otros grupos. Es difícil resumir en términos generales los problemas que genera las agencias regulatorias al entrar con las realidad del sur global, pero al menos dos problemas con los cuales se ha enfrentado es con la integración de la participación ciudadana y con el “constitucionalismo regulatorio”.

El Estado Regulador Constitucional, a diferencia del Estado Regulador, *“no solo consiste en la regulación adoptada por agencias independientes que intentar corregir las fallas del mercado, sino que también intenta implementar políticas redistributivas a través de esta*

regulación- este último propósito es liderado por la Corte Constitucional” (Urueña, Global Water Governance and the Rise of the Constitutional Regulatory State in Colombia, 2013). Esto es muy importante porque uno de los límites a la independencia de las agencias regulatorias en el sur proviene de entender la “prestación del servicio” como un derecho que debe ser protegido. Es así como el papel de los jueces entra a ser esencial, y limitan la libertad de la agencia, para que las políticas que incorporen sean redistributivas.

Por otra parte, la participación ciudadana también puede chocar con el modelo del Estado Regulador, principalmente cuando estos se encuentran en contra de las políticas implantadas por la agencia. Por lo cual pueden presentarse situaciones donde la población organiza para realizar marchas, y demás tipos de movilizaciones, ya sean en contra de la privatización misma de los servicios, o por el alza de tarifas, etc. (Hochsteller, 2013).

El límite que encuentran las agencias regulatorias en el sur están ligadas con la protección de derechos y la búsqueda de una sociedad más igualitaria, un campo muy poderoso y que permite dar un límite al mercado. Es así como en donde un modelo encuentra un límite, las feministas han encontrado su fuerza y espacio de expansión.

De cierta forma, las defensoras de los derechos humanos de la mujer han logrado un mayor nivel de independencia gracias a sus conocimientos teóricos, y en el caso de muchas funcionarias involucradas con el activismo, su práctica. En este caso vemos como el conocimiento en derechos humanos logra una posición importante a nivel institucional a medida que se entiende de forma más especializada y de que es más difícil que personas que no manejan el lenguaje puedan entrar a realizar políticas.

Sin embargo, la finalidad de entidades como el Viceministerio de la Mujer en Perú o del INAMU es lograr una verdadera igualdad de género, un reto mucho mayor y transversal, por lo cual que las políticas queden centralizadas en una sola entidad no es suficiente. Por ejemplo, el Estado costarricense ha recibido dinero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y del la Oficina Regional para América Latina y El Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas para realizar manuales de buenas prácticas en el sistema de salud para atender a mujeres víctimas de la violencia¹⁹. Así mismo, el Banco Interamericano de Desarrollo ha realizado préstamos al mismo país para que invierta en la segunda etapa del Programa de Modernización de la Administración de Justicia, y una de las acciones que han adelantado es realizar un Protocolo para la Atención

¹⁹ Ver: Servicios De Salud Para Víctimas/ Sobrevivientes De Violencia Sexual: Buenas Prácticas Costa Rica <http://aecid.lac.unfpa.org/webdav/site/AECID/shared/files/Servicios%20de%20salud%20para%20victimas%20de%20VS.%20Buenas%20pr%C3%A1cticas%20Costa%20Rica.pdf>

de la Violencia Sexual y/o Doméstica en el Departamento de Departamento de Medicina Legal²⁰.

Es muy interesante ver cómo la protección de los derechos humanos es un punto clave no solo para la consolidación de grupos y de sujetos que son definidos a través de los discursos que el derecho internacional introduce, sino también la fuerza institucional que desata. Es así como esta fuerza puede ser evaluada desde la perspectiva de servicios como los del agua, que al ser considerado como un derecho humano, da voz y poder a nuevos actores. El Estado regulador constitucional es solo una muestra de nuevas formas de gobernanza, sin embargo, el trabajo de las feministas, activistas locales y funcionarias de estas entidades merece la pena ser evaluado a profundidad para como en donde el Estado regulador encuentra su límite, el feminismo ha encontrado mucha más fuerza.

Si bien la experticia y su habilidad a nivel internacional ha sido un factor importante, es importante resaltar que aún se enfrentan muchos retos. Lo que fue resaltado por la funcionaria peruana es la realidad del día a día de muchas mujeres, y es que a pesar de los esfuerzos, aún se encuentran con jueces reacios a cambiar sus opiniones sobre valoración de pruebas, a fiscales que no manejan adecuadamente los casos de violencia sexual o doméstica, o empleadores que no están dispuestos a pagar lo debido a una mujer que hace el mismo trabajo que un hombre.

20 Ver: Convenio de Préstamo 1377/OC-CR entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo y Protocolo para la Atención de la Violencia Sexual y/o Doméstica en el Departamento de Departamento de Medicina Legal, disponible online: www.poder-judicial.go.cr/genero/index.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D397:protocolo-de-atencion-a-victimas-en-medicina-legal%26id%3D41:protocolos+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=co

Bibliografía

- Moran, M. (2001). The Rise of Regulatory State in Britain. *Parlamentary Affairs* , 54, 19-34.
- YEUNG, K. (2010). The Regulatory State. In M. & R. Baldwin (Ed.), *Oxford Handbook of Regulation* (pp. 64-85). Oxford: Oxford University Press.
- Morgan, B., & Dubash, N. (2013). *The Rise of the Regulatory State of the South*. Oxford: Oxford University Press.
- Halley, J. (2006). From the international to the local ins feminist legal response to rape, prostitution/sex working, and sex afficking: Describing governance feminism. *Harvard Journal of Law and Gender* , 29, 340.
- Instituto Nacional de la Mujer Costa Rica. (25 de abril de 2014). From <http://www.inamu.go.cr/web/inamu/9>
- Charlesworth, H., Chinkin, C., & Wright, S. (1991). Feminist Approaches to International Law. *The American Journal of International Law* , 85 (4), 613-645.
- Meyer, M., & Prugl, E. (1999). *Gender Politics in Global Governance*. Owman and Littlefield Publishers INC.
- Gilardi, F. (2002). Policy Credibility and Delegation to independent regulatory agencies: a comparative empirical analysis. *Journal of European Public Policy* , 9 (6), 873-893.
- Smith, W. (1997). *Utility Regulators- The independence Debate*.
- ENGLE, K. (2005). International Human Rights and Feminism: When Discourses Keep Meeting. In D. B. Manji (Ed.), *International Law: Modern Feminist Approaches*. Oxford.
- Engle, K. (1992). International Human Rights and Feminism: When Discourses Meet. *Michigan Journal of International Law* (517).
- Urueña, R. (2012). *No Citizens Here: Global Subjects and Participation in International Law* (Vol. 15). (M. Koskeniemi, Ed.) Boston: Martinus Nijhoff.
- Charlesworth, H. (1999). Feminist Methods in International Law. *The American Journal of International Law* , 93 (2), 379-394 .
- Adler, E. (2008). The Spread of Security Communities: Communities of Practice, Self-Restraint, and NATO's Post-Cold War Transformation. *European Journal of International Relations* , 195 (14).

Snyder, W. (1997). *Communities of Practice: Combining Organizational Learning and Strategy Insights to Create a Bridge to the 21st Century*. From <http://www.coil.com/coil/knowledge-garden/cop/cols.shtml>

Facio, A. (n.d.). *Femismo, género y Patriarcado*. Retrieved 5 de 11 de 2014 from centreantigona.uab.es:

<http://centreantigona.uab.es/docs/articulos/Feminismo,%20g%C3%A9nero%20y%20patriarcado.%20Alda%20Facio.pdf>

Haas, P. M. Introduction: epistemic communities and international policy coordination. *International Organization* , 46 (1), 1-35.

Plan Nacional de Igualdad de Género, P. (n.d.). www.mimp.gob.pe. From Ministerio de la mujer y Poblaciones Vulnerables: <http://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgignd/planes/plan-nacional-igualdad-genero-2012-2017.pdf>

Urueña, R. (2013). Global Water Governance and the Rise of the Constitutional Regulatory State in Colombia. In M. Moran, *The Rise of The Regulatory State of the South* (pp. 27-52). Oxford University Press.

Hochsteller, K. (2013). Civil Society and the Regulatory State of the South. In B. D. Morgan, *The Rise of the Regulatory State of the South* . Oxford University Press.